

## **CAPÍTULO VI**

### **ENTRE LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS, EL AUMENTO DEL DESEMPLEO Y LA CAÍDA DEL PODER ADQUISITIVO, 1983-2003**

**María Florencia Correa Deza – Beatriz Álvarez**

#### **1. Presentación**

Contrario a las expectativas de recomposición del mercado de trabajo que generaba la vuelta a la democracia, los tucumanos sufrieron un progresivo empeoramiento de las condiciones laborales. Durante la década del '80 la inflación se convirtió en un fenómeno recurrente que afectó al poder adquisitivo de los trabajadores. Además, la acuciante deuda externa significó el comienzo de las políticas de ajuste a nivel nacional con implicancias negativas para la economía provincial y, por ende, para la dinámica laboral que comenzó a verse afectada por el desempleo. En este escenario, sin embargo, el Estado todavía logró atenuar parcialmente este deterioro a través de regulaciones laborales y el aumento del empleo público. En los '90 el ajuste se profundizó y la situación de los trabajadores se agravó aún más. La apertura comercial, la ausencia del Estado y las desregulaciones transformaron de manera profunda la estructura económica tucumana. Sumado a esto, la flexibilización laboral profundizó la precarización de las condiciones de trabajo traducida en elevados niveles de desempleo, subempleo, sobreempleo e informalidad. Una vez finalizada la década, las políticas de ajuste se volvieron insostenibles y, al empeoramiento de la situación laboral de los tucumanos, se sumó una caída drástica y significativa de su poder adquisitivo, ubicándose incluso por debajo del promedio nacional.

#### **2. La composición del mercado laboral tucumano en la década de 1980**

Pasado el duro golpe que significó para la economía tucumana el cierre de los ingenios en los '60 y el plan económico de la dictadura militar, el retorno a la democracia prometía recomponer el mercado laboral tucumano. Si bien con profundos cambios respecto de las décadas anteriores, los puestos de trabajo siguieron dependiendo principalmente de la agroindustria azucarera y, paulatinamente, se consolidaron dos nuevos sectores demandantes de mano de obra: el sector citrícola y el sector público.

La producción tucumana de limones experimentó una expansión ininterrumpida desde mediados de los '80 que se profundizó en la década siguiente. Su crecimiento promedio fue del 8% anual en el período 1980-2012 (IDEP Tucumán, 2012, p. 2) gracias a los avances en la superficie sembrada y la tecnificación, así como en la producción de fruta. De esta manera, la provincia se posicionó como el primer productor mundial de limones.

El avance de la superficie cultivada con citrus se produjo en detrimento del área destinada al cultivo de la caña. Dada la envergadura que adquirió, el sector citrícola en las últimas décadas del siglo XX se convirtió, junto con el sector azucarero y el sector público, en uno de los principales demandantes de mano de obra, tanto local como regional. Se estima que hacia los primeros años del nuevo siglo la actividad citrícola empleaba aproximadamente 40.000 personas (IDEP Tucumán, 2012, p. 21) lo que significaba un 12% del total de mano de obra empleada.

Por otra parte, el sector público tucumano actuó, en los años '80, a modo de “amortiguador” de las políticas regresivas<sup>1</sup> implementadas desde el Estado Nacional (Osatinsky, 2012). De esta manera, el proceso recesivo producto de las políticas de ajuste y la consiguiente expulsión de trabajadores llevó al gobierno de Fernando Riera (1983-1987) a engrosar las filas del empleo público para morigerar la crisis social producto del incremento del desempleo. Nombrados alrededor de 10.000 agentes, la década del '80 significó para la provincia el comienzo de la “empleomanía”,<sup>2</sup> se estima que los trabajadores empleados en el sector público pasaron de 70.452 –según el Censo de Población 1980– a 81.640 –según el Censo de Población de 1991.<sup>3</sup> El crecimiento del sector público presionó sistemáticamente al fisco provincial desafiando al Estado en la búsqueda de alternativas para sustentarlo.

---

<sup>1</sup> Cuando hablamos de políticas regresivas nos referimos a políticas públicas, llevadas a cabo por el gobierno nacional o provincial, cuyo resultado termina beneficiando a los sectores más ricos y perjudicando a los sectores más pobres.

<sup>2</sup> Este término fue utilizado por el diputado provincial Armando Neri Santillán, representante de la UCR que acusaba a los funcionarios del PJ provincial de ejercer prácticas clientelares al fabricar nombramientos buscando un rédito político. (<http://www.lagaceta.com.ar/nota/692438/opinion/guerra-politica-numeros.html>) (Consultado el 27.02.2017). En adelante, el término sería utilizado sobre todo para referirse al proceso de nombramientos en el sector público que llevó adelante el Gobernador Riera. <http://www.lagaceta.com.ar/nota/60358/argentina/riera-fue-padre-bono-intervencion-acabo-domato.html> (Consultado el 13.12.2016)

<sup>3</sup> Esto representó un 16% de incremento en el sector público tucumano frente a un aumento del 7% en el total país, más del doble que Nación.

Los tres sectores anteriormente descriptos (citrus, azúcar y empleo público) integraban las ramas de “Agricultura, caza, silvicultura y pesca”, “Industrias manufactureras” y “Servicios comunales, sociales y personales”.<sup>4</sup> (Ver gráficos N° 1 y 2 en Anexo).

El 75% de la mano de obra provincial se concentraba en sólo cuatro ramas de actividad: Agricultura, Manufacturas, Comercio y Servicios comunales, sociales y personales<sup>5</sup> (esta última comprende el empleo público, el servicio doméstico y los servicios personales). El panorama era aún más desalentador si tenemos en cuenta que estas ramas no estaban asociadas a las actividades más productivas o con mayor valor agregado.<sup>6</sup> La rama de actividad que mayor porcentaje de mano de obra empleaba en 1980 era la rama de servicios comunales (23,7%), seguida por la agricultura (20,8%), la manufactura (15,9%) y por último el comercio (14,8%).

Las políticas implementadas desde el Estado nacional y provincial produjeron, durante la década de 1980, profundos cambios en la estructura ocupacional tucumana. El retroceso protagonizado por la actividad azucarera y, por ende, la disminución de la mano de obra empleada en la misma, no pudo ser amortiguado por el avance del sector citrícola y la incorporación creciente de empleados en el sector público. Esto se manifestó en el descenso de la ocupación en la rama agrícola que se redujo un 31% entre 1980 y 1991. Otro retroceso importante lo protagonizó el empleo en el sector manufacturero el cual disminuyó aproximadamente un 15% en el período intercensal.

Otra de las características de la década fue el avance de las relaciones laborales informales. La mencionada “empleomanía” en el sector público no fue la única causante del aumento en la rama de “servicios comunales, sociales y personales”. Dentro de esta categoría no sólo se incluyeron las ramas que corresponden al sector público

---

<sup>4</sup> Para el caso tucumano, tanto el Censo de 1980 como el de 1991 engloban dentro de la categoría “Agricultura, caza, silvicultura y pesca” la producción agropecuaria y los servicios agrícolas entre otros. En la categoría “industrias manufactureras”, la faena de ganado, los molinos, los ingenios, la industria del tabaco, industrias alimenticias, la industria del papel, construcción de material de transporte, entre otras. En la categoría “servicios comunales, sociales y personales” la administración pública y defensa, la instrucción pública, servicios de sanidad, entre otros. (Censo Nacional de Población y Vivienda 1980).

<sup>5</sup> El sector se define como la forma de trabajo humano, no materializado en bienes tangibles, que se realiza con el objetivo de satisfacer las necesidades de los integrantes de una sociedad.

<sup>6</sup> Para considerar a una actividad más productiva o con más valor agregado la misma debe emplear mano de obra de alta calificación y/o capital de alto contenido tecnológico.

tucumano, sino también al servicio doméstico y a los servicios personales en general. Por ende, el avance en esta rama no sólo tuvo que ver con el nombramiento de agentes del Estado (cuyo aumento fue un 49%), sino también con el avance del servicio doméstico (que se incrementó en un 76%) y de los trabajadores por cuenta propia (que lo hicieron en un 21% aproximadamente).

El trabajo informal supone la falta de aportes y retenciones laborales (jubilación, pensión, obra social, seguro de vida y de sepelio, entre otros conceptos de la seguridad social); la falta de estabilidad laboral y las condiciones de trabajo deficientes (salarios bajos, jornada laboral extensa, cumplimiento de horas extras o turnos extraordinarios, entre otros). El avance de estos problemas del mercado laboral demuestra la regresividad de la que hablábamos en párrafos anteriores, pero también evidencia que el avance del cuentapropismo indica un menor desarrollo económico de la provincia y del país (*Página 12*, 17.11.2013).<sup>7</sup>

Otro rasgo importante del mercado laboral tucumano en la década del '80 fue la paulatina incorporación de la mujer. En 1980 la participación femenina en la población ocupada era de aproximadamente el 24%, mientras que hacia 1991 dicho porcentaje alcanzó el 34%. Este incremento de la participación femenina en la fuerza laboral se explica por el panorama adverso de la economía provincial –y en general del país– que puso a la mujer en la necesidad de aportar ingresos a la unidad familiar para amortiguar los efectos de la crisis y mantener los niveles de consumo. El aumento del trabajo femenino se dio en un contexto en el cual actividades tradicionalmente masculinas, tales como la industria y la

---

<sup>7</sup> El trabajo por cuenta propia o cuentapropismo considera a aquellas personas que trabajan de manera independiente sin emplear a persona alguna. Los trabajadores por cuenta propia constituyen un grupo heterogéneo en el que podemos reconocer a cuentapropistas profesionales que desarrollan actividades altamente calificadas (médicos, ingenieros, contadores, abogados, arquitectos) y perciben ingresos superiores a los de los trabajadores registrados; cuentapropistas de oficios que son trabajadores calificados (enfermeros, albañiles, electricistas, taxistas, profesores, etc.) que ganan en promedio lo mismo que un trabajador asalariado no registrado y por último los cuentapropistas de subsistencia que incluye a trabajadores no calificados (changanines, vendedores ambulantes, cuidadores, etc.) que encuentran en este tipo de actividad la alternativa al desempleo y perciben salarios inferiores al de los asalariados no registrados. “El cuentapropismo”, por Diego Rubinzal (<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7250-2013-11-17.html>, consultado el 1.3.2017). Todos los trabajadores por cuenta propia resultan trabajadores informales en tanto no cuentan con aportes de la seguridad social, estabilidad laboral, etc., Mientras que no todos los trabajadores informales son cuentapropistas, en tanto el empleo “en negro” se considera trabajo informal, sin ser trabajo por cuenta propia.

construcción, entraron en franca decadencia (Panaia, 2000).<sup>8</sup> (Ver gráfico N° 3 en Anexo).

En nueve de las diez ramas de actividad consideradas, las mujeres representaban menos del 40% y en la mitad de las diez ramas no alcanzaban el 10% del total de trabajadores. Si bien en los '80 el mercado laboral tucumano siguió dominado principalmente por hombres, la participación femenina se incrementó en la mayoría de las categorías laborales en cuantías que van desde el 4% (en "Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a las empresas") hasta casi el 80% (en "Agricultura, caza, silvicultura y pesca" y "Electricidad, gas y agua"). Asimismo, se mantuvo un claro sesgo de género que asignó determinadas tareas a las mujeres y otras para los hombres. Un claro ejemplo fue la preponderancia de la participación femenina en el trabajo doméstico (que se incrementó un 55,4% durante la década), así como en el empleo público, la educación, la sanidad, entre otras tareas tradicionalmente desarrolladas por mujeres. Este hallazgo se complementa con el incremento de la participación femenina en la rama de "Actividades no bien especificadas", que alcanzó el 65% entre 1980 y 1991. Se puede inferir que las mujeres ingresaban al mercado laboral a desarrollar tareas "tradicionalmente" femeninas y otras tareas "nuevas" que les permitían incrementar los niveles de ingresos pero que desde el punto de vista estadístico todavía no se reconocían como categorías laborales, lo cual estaría dando cuenta de un mercado laboral incipiente y en formación.

El retroceso de las actividades económicas en el sector agrícola produjo, como es usual en este tipo de procesos, que miles de personas desempleadas comiencen a buscar nuevos empleos en las actividades económicas que surgían. Este proceso en general produce una disminución de la población rural, en tanto se desplaza a las ciudades en busca de empleos en el sector comercial de servicios o por cuenta propia, lo que genera el incremento de la población urbana. Tucumán no quedó fuera de este proceso y durante la década de 1980 experimentó un descenso de la población rural de alrededor del 23% y un similar incremento del empleo urbano (Osatinsky, 2012). Este tipo de movilidad tenía consecuencias negativas para los trabajadores: en primer lugar implicaba que aquellos que se mudaran a las ciudades perdieran el vínculo social y económico con su lugar de origen; por otro lado, se radicaban en ciudades con formas de vida, en algunos casos,

---

<sup>8</sup> En el caso tucumano, la rama de construcción redujo la ocupación de mano de obra aproximadamente en un 32% entre 1980 y 1991 y la industria lo hizo alrededor de un 16% en el mismo período.

radicalmente distintas a la suyas; y, por último, a menudo debían instalarse en las ciudades en condiciones materiales de vida muy precarias (viviendas alquiladas con servicios deficientes). Todo este proceso no hizo más que empeorar y precarizar el empleo y las condiciones de trabajo.<sup>9</sup> A continuación analizaremos los procesos y políticas económicas que nos permitan comprender estos cambios y explicar el avance del desempleo, el empleo informal y el subempleo.

### **3. Pauperización de las condiciones de trabajo y protestas laborales en los '80**

Al comenzar su gobierno, en diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) enumeró, ante la Asamblea Legislativa, los que serían sus objetivos de gobierno para los próximos seis años. Encabezó la lista el intento por reparar los daños sociales y laborales ocasionados por la dictadura militar. Respecto de la actividad sindical, anulada por esta última, el gobierno se propuso garantizar la existencia de un único sindicato por actividad y fue más allá en la regulación gremial, garantizando el quite de personería jurídica a aquellos que hicieran política partidaria (Rapoport, 2008). El compromiso con la defensa de los derechos humanos y las reparaciones por los crímenes de la dictadura puede leerse también como una acción reparadora para los trabajadores, en tanto víctimas de los crímenes y políticas represivas implementadas entre 1975 y 1983.

Los años radicales se caracterizaron por períodos de estancamiento y recesión, profundas caídas del producto bruto interno y altos niveles de inflación que terminaron con los episodios de hiperinflación de 1989. El origen de este comportamiento podemos encontrarlo en la política económica del período que, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento, entre otros), implementó diversos planes de ajuste que tuvieron como objetivo obtener los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos de

---

<sup>9</sup> Cuando hablamos de precarizar el empleo nos referimos a situaciones por las que atraviesan algunos trabajadores que hacen que las labores que desarrollan sean más inseguras, más inciertas y que no tengan garantías. La precarización laboral tiene que ver con salarios insuficientes, con riesgos de salud o incluso de vida al ejercer el trabajo, con la falta de estabilidad laboral, con la jornada de trabajo extensa, con la violencia laboral, con la falta de obra social, de descuento por jubilación, etc.

la deuda externa. Estas políticas de ajuste no fueron complementadas con políticas de fomento industrial ni de ampliación del mercado interno, sino que perseguían la obtención de divisas para pagar la deuda mediante la exportación de la producción agrícola–ganadera, en un contexto nacional e internacional de precios poco favorable. De esta manera el gobierno radical no hizo más que profundizar la situación económica heredada de la dictadura militar en lo que respecta a la destrucción de la industria y a la reprimarización de la economía argentina (Rapoport 2008, Ferrer 2008, Schvarzer, 1998).<sup>10</sup>

En este contexto, la economía tucumana experimentó períodos de crecimiento de la producción de bienes y servicios, como ocurrió entre 1980 y 1988, años en los que el Producto Bruto Geográfico (en adelante PBG)<sup>11</sup> se incrementó alrededor de un 13%; y períodos de decrecimiento, hacia el final de la década, en donde el PBG disminuyó un 21% aproximadamente.

El aumento o disminución del PBG proviene de una serie de cambios producidos en los sectores productivos.<sup>12</sup> La mayor demanda internacional por granos y los elevados precios internacionales de la soja y frutales industriales incentivaron al sector agrícola tucumano a volcarse a la producción de cereales, soja y limón, mientras que los cultivos "tradicionales", como la caña de azúcar, perdieron superficie sembrada.

---

<sup>10</sup> Reprimarización de la economía se refiere al proceso por el cual las actividades industriales desarrolladas y profundizadas en la Argentina desde la década de 1940 retrocedieron con la dictadura de 1976. Paralelo a este proceso recuperaron importancia relativa las actividades primarias, es decir, la agricultura y la ganadería de exportación que proporcionaban las divisas necesarias.

<sup>11</sup> El Producto Bruto Geográfico o PBG mide el valor de la producción de bienes y servicios finales que se produjeron en el territorio tucumano durante un determinado año. Podríamos decir que así como a nivel nacional utilizamos el Producto Bruto Interno o PBI para medir la producción anual de la economía del país, el PBG sirve para medir la producción anual de la economía de cada una de las 23 provincias de la Argentina. Tanto el PBI como el PBG nos permiten evaluar si la economía, nacional o provincial, crece (aumento del PBI/PBG año tras año) o decrece (disminución del PBI/PBG año tras año).

<sup>12</sup> Como el PBG mide la producción total de bienes y servicios producidos en la provincia durante un año, podemos decir que esos bienes y servicios provienen de distintos "sectores productivos" (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; explotación de minas y canteras; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio minorista, mayorista, reparaciones, hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; administración pública, defensa, enseñanza, servicios sociales y salud y otras actividades). Producto Bruto Geográfico de Tucumán a Precios de Mercado de 1993, Serie Histórica por Sector de Actividad Económica, Dirección de Estadísticas de la Provincia de Tucumán, <http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/2015-01-27-12-59-51>, consultado el 27.02.17)

Los trabajadores azucareros desempleados no pudieron reubicarse en los nuevos cultivos dado que estos últimos estaban asociados a un mayor grado de tecnificación (Giarraca, Bidaseca y Mariotti, 2001). Por un lado, la maquinaria requerida era demasiado costosa para los pequeños productores, quienes se vieron obligados a vender sus explotaciones y, por ende, expulsar la mano de obra familiar que solían utilizar. En segundo lugar, los cultivos más tecnificados requerían menor cantidad de brazos pues utilizaban maquinaria que los sustituía. Ambos fenómenos implicaron que la demanda de trabajadores en las nuevas actividades fuera insuficiente para capturar los contingentes de desempleados del sector azucarero.<sup>13</sup>

Si bien el crecimiento de la actividad citrícola no fue capaz de incorporar toda la mano de obra desempleada en la azucarera, sí introdujo en el mercado laboral elementos “modernos” de contratación –el salario mensual, los beneficios sociales y la afiliación sindical– y mantuvo condiciones “tradicionales” de trabajo propias del empleo rural –pago a destajo, salarios bajos, discontinuidad, existencia de intermediarios, trabajo en negro– (Vazquez Laba, 2004). Estas condiciones laborales se combinaron de acuerdo al tipo de trabajo que se desarrollaba en cada una de las fases de producción. Trabajadores permanentes para las tareas de finca (plantación, poda, fumigación, etc.); mano de obra estacional para las tareas de cosecha de la fruta; transitorios para las tareas de empaque y, por último, escasa demanda de empleados permanentes en la fase industrial.

La mayor demanda de mano de obra estacional era en la época de cosecha. Durante ese período el 82% de los empleados eran hombres y el resto mujeres. La novedad durante la década del '80 fue que, paulatinamente, el trabajo de la mujer en la cosecha del limón pasó de ser una “ayuda” a considerarse una actividad asalariada, registrada y blanqueada. Este rasgo implicaba un elemento positivo que fue la formalización del trabajo femenino (aportes jubilatorios, obra social, salario familiar); sin embargo, esta inserción laboral devenía del empeoramiento de las condiciones de vida que empujaban a las mujeres

---

<sup>13</sup> Las referencias a los pequeños productores de la provincia será recurrente a lo largo de este capítulo. La situación de los mismos es importante desde el punto de vista laboral porque a menudo trabajaban sus campos bajo la forma de mano de obra familiar. La desaparición de estos pequeños cañeros y la concentración de la producción en pocas manos acarrió la expulsión de mano de obra familiar y dejó desempleadas a aquellas personas que trabajaban sus propios campos. En este sentido, la situación de la mano de obra familiar es importante desde el punto de vista laboral, porque los procesos recesivos hacen de ésta una potencial población económicamente activa.



a salir en búsqueda de un trabajo para completar los escasos ingresos familiares (Vázquez Laba, 2004).

Para que la fase agrícola de la actividad azucarera no siguiera retrocediendo, el Estado Nacional generó políticas para incentivar la tradicional producción. Es así que en 1985 se introdujo un cambio en el modelo regulatorio de la actividad. Mediante un decreto presidencial se instituyó en la provincia la “maquila oficial”, que modificaba la forma de pago por la caña de ingenios a cañeros (Rofman, 1999, p. 161). A partir del nuevo contrato los cañeros, que antes recibían dinero por la caña, ahora recibirían el 53% del azúcar producido con la caña llevada al ingenio. El 47% restante quedaría en manos del ingenio.

Esta nueva forma de regular la actividad azucarera permitió que los pequeños productores pudieran permanecer en el mercado a pesar de las condiciones económicas poco favorables. Estos resultados fueron alentadores desde el punto de vista laboral dada la importancia de los ingenios como demandantes de mano de obra pero, sobre todo, por la trascendencia de los denominados “productores familiares”, productores de caña de los cuales el 80% registraba trabajo familiar. De ese universo de productores sólo el 20% ocupaba mano de obra familiar y mano de obra transitoria, en tanto que el 80% restante considerados “campesinos” se componía de mano de obra familiar combinada con un tractor, es decir, familias que poseían tierras a las cuales las trabajaban sólo sus integrantes (Rofman, 1999).

El sector productor de tomate también experimentó cambios que incidieron en las condiciones de trabajo. Al comenzar la década, el avance económico del sector se debió a la obtención de cosechas tempranas respecto de otras áreas del país como Salta y Corrientes. La producción de tomates y luego de frutillas se hizo íntegramente por productores locales y gracias a la paulatina incorporación de mano de obra boliviana que aceptaba desarrollar determinadas actividades que la mano de obra local despreciaba (Rivas, 2001). Los inmigrantes bolivianos desarrollaban tareas de “tutoraje”, es decir, colocación de tutores para sostener las plantas y tareas de recolección de la fruta.

Promediando los años ‘80 diversos hechos produjeron cambios en la producción tomatera y, por ende, en la ocupación de mano de obra. La competencia de la producción local con la internacional derivada de la inexistencia de aranceles aduaneros; los problemas fitosanitarios y los

altos costos de producción; los períodos inflacionarios de la década; la competencia de la producción salteña y la creciente necesidad de incorporación de tecnología (fertilizantes, nuevas semillas, maquinaria, entre otros) generaron períodos críticos para los productores tomateros y, por ende, para los trabajadores empleados en la actividad. Se estima que entre 1970 y 1990 el número de productores tradicionales hortícolas de la provincia se redujo un 40%. El resto de los productores que tuvieron que abandonar la producción tomatera se enfrentaron a tres posibilidades: vender sus tierras al mercado inmobiliario con fines de vivienda, adecuar su producción tomatera a los nuevos requerimientos o dedicar las tierras a otro cultivo, en este caso el de frutilla (Rivas, 2001).

El cultivo de la frutilla en la zona de Lules, así como el limón y la soja, se vincularon con la creciente demanda y los elevados precios de la fruta. El incremento de la superficie cultivada con frutilla se combinó con la incorporación de tecnología, riego y asesoría técnica. La mano de obra captada por la actividad era aquella que había quedado desempleada de la producción tomatera pero también siguió recibiendo trabajadores bolivianos. Esta demanda por mano de obra se caracterizaba por la precariedad contractual, lo que permitía que concluido el ciclo de la frutilla, los obreros se desplazaran a otra actividad o retornaran a su país de origen (Rivas y Natera Rivas, 2007). Las diferencias con la ocupación en el tomate radicaban en que las actividades en la frutilla eran más diversas y precisaban cuidados durante los meses de otoño e invierno, lo que favorecía el empleo por más tiempo. De esta manera, los obreros trabajaban en la frutilla en el otoño y el invierno y en el tomate en la primavera y parte del verano (Rivas y Natera Rivas, 2007).

Pese al deterioro de las condiciones de la producción tomatera y de las deficientes condiciones económicas de la década de 1980, los migrantes bolivianos pudieron insertarse en las actividades frutihortícolas, primero mediante contratos de mediería,<sup>14</sup> luego mediante arrendamientos<sup>15</sup> y en algunos casos alcanzaban la propiedad de la tierra convirtiendo a los migrantes temporales en residentes permanentes de Lules (Rivas y Natera Rivas, 2007). Las explotaciones que pudo generar

---

<sup>14</sup> La mediería es un contrato agrícola de asociación en el cual el propietario de tierras (llamado *concedente*) aporta una finca rural y un agricultor (llamado *mediero*) aporta su trabajo y herramientas; se dividen, generalmente en partes iguales, el producto y las utilidades. La dirección de la finca rural generalmente corresponde al concedente.

<sup>15</sup> El contrato de arrendamiento o locación es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un bien mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado.

este tipo de trabajador, devenido en propietario, se caracterizaron por ser de pequeña extensión, escasa inversión de capital y por la importancia de la mano de obra familiar como estrategia para reducir al máximo los costos.

El sector industrial tucumano también experimentó un retroceso durante la década de 1980. Entre 1974 y 1993 la cantidad de establecimientos industriales se redujo casi un 50% mientras que el personal ocupado en la industria lo hizo en una cuantía similar. Estos resultados respondieron a la política de desindustrialización o, como vimos anteriormente, de reprimarización – llevada a cabo por la dictadura militar– y a las imposibilidades de revertir ese proceso –en la década del ‘80–.

A pesar de este repliegue de la actividad, se registraron altibajos internos. Si consideramos el período 1974-1985 observamos el desarrollo de industrias importantes en la economía tucumana, pensemos en la industria automotriz, de alimentos, de papel y en la industria citrícola, como los ejemplos más claros que determinaron que entre 1980 y 1985 el PBG industrial se incrementara un 3% y, hacia 1988, haya alcanzado el 29% respecto de 1980. Al finalizar la década, el resultado del comportamiento industrial de la provincia arrojó un saldo negativo verificándose, en 1989, una disminución del 12% en el valor de la producción industrial (Osatinsky, 2012). Este retroceso fue el responsable de la disminución en el porcentaje de PEA empleada en la industria entre 1980 y 1991 (de 15,9% a 13,4%), tal y como vimos en el apartado anterior.

Sin duda, uno de los mayores responsables del retroceso de la actividad industrial de la provincia fue el comportamiento de la industria azucarera. Los problemas del sector no sólo significaron la expulsión de trabajadores propios, se estima que los ingenios concentraban el 42% del empleo industrial en 1974, sino también significaron la decadencia de los eslabonamientos que la industria pudo generar, con la consiguiente expulsión de mano de obra.<sup>16</sup> Al finalizar la década del ‘80 el peso de la

---

<sup>16</sup> Cuando una determinada producción de un bien final genera un estímulo para el desarrollo de otra actividad, que utiliza a la primera como insumo, hablamos de eslabonamiento hacia adelante. Por el contrario cuando una industria genera un estímulo para otra que constituye un insumo para la primera, entonces hablamos de eslabonamiento hacia atrás. En la producción de azúcar un eslabonamiento hacia adelante es la industria de galletitas o de bebidas gaseosas que requieren del dulce como insumo para la producción; mientras que un eslabonamiento hacia atrás podría ser una metalúrgica que produzca repuestos para la maquinaria industrial que utilizan los

industria azucarera en el sector industrial se redujo un 25% (Osatinsky, 2010).

Otro hecho que golpeó a la industria provincial fue el cierre de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo en el año 1980. La dictadura militar impulsó un programa de reordenamiento que remató el proceso de decadencia ferroviaria gestado desde la década del '60. Con la utilización de consignas eficientistas y anti deficitarias se dio por finalizada una etapa trascendental en la historia de la industria nacional (Sosa Martos, 2015).<sup>17</sup> Se estima que los talleres ocupaban un 4% de la mano de obra industrial de la provincia (Osatinsky, 2010), con lo cual el cierre de los mismos implicó engrosar las filas del desempleo con casi 2.000 trabajadores. En virtud de las medidas represivas llevadas a cabo por la dictadura se desactivaron las respuestas por parte del movimiento obrero, excepto la concreción de paros llevados adelante por grupos de comerciantes que cuestionaron, debatieron y accionaron en respuesta a las consecuencias del cierre de los talleres sobre la economía y la sociedad taficeña (Sosa Martos, 2015).

Durante la campaña electoral, Raúl Alfonsín prometió a los habitantes de Tafí Viejo que propiciaría la reapertura de los talleres. Ya al mando del ejecutivo nacional, el Presidente cumplió con su propuesta de campaña. En enero de 1984 empezaron a efectivizarse las reincorporaciones del personal técnico y de los trabajadores a los talleres. Al finalizar la primera etapa se habían empleado a 400 operarios, todos ex trabajadores. Si bien esta cantidad era alentadora para aquellas familias que recuperaban el empleo, en realidad representaban menos de la mitad de los trabajadores que componían los talleres en 1980. La imposibilidad de absorber mayor cantidad de mano de obra se debió a la pérdida de capacidad productiva que sufrieron los talleres luego del cierre, a lo que se sumó el avance tecnológico en la actividad ferroviaria que dejó obsoletas secciones que operaban a principio de la década (Sosa Martos, 2016).

En lo que respecta al sector comercial y de servicios, al promediar

---

ingenios, esos repuestos serían insumos para la industria azucarera.

<sup>17</sup> Consignas “eficientistas” hace referencia a la idea de que la actividad ferroviaria no funcionaba de manera eficiente en el sentido económico, es decir, era una actividad cuyos costos superaban a los beneficios. Si bien puede haber ocurrido que los costos hayan sido mayores que los beneficios, la actividad ferroviaria continuaba vigente gracias a los subsidios estatales. De aquí proviene la idea de que las consignas “anti deficitarias” buscaban reducir el déficit fiscal por medio de la eliminación de las actividades que requerían altos niveles de subsidios estatales.

la década de 1970, Tucumán contaba con 17.000 establecimientos que ocupaban alrededor de 45.000 empleados. La década de 1980 significó una expansión importante del sector servicios en la provincia, no así del comercial. Mientras el primero incrementó el número de establecimientos en un 32% y el número de trabajadores en un 63%, aproximadamente, en el segundo se redujo un 20% y 21% respectivamente (Osatinsky, 2010). El crecimiento del sector público, asociado al fenómeno de la “empleomanía”, se reflejó en los niveles de ocupación. Hacia 1983 el empleo público alcanzaba los 33.600 agentes y al finalizar la década, en 1989, el número trepó a 47.500, lo que implicó un crecimiento del 41%. Este hallazgo evidencia que el empleo estatal sirvió para mitigar los efectos del desempleo en el sector privado.<sup>18</sup>

A pesar de ciertos avances en algunos sectores que capturaban parcialmente la mano de obra desplazada y un intento por parte del Estado de contener la caída en las condiciones de trabajo,<sup>19</sup> el ideal de eficiencia que iba adueñándose de la economía imponía nuevas formas de producción con nuevas tecnologías y procesos productivos. Esas innovaciones empujaban a la concentración de la producción y la consiguiente desaparición de pequeñas y medianas empresas que se complementaban con procesos de flexibilización laboral<sup>20</sup> tendientes a reducir los costos del empleo.

En el marco de este proceso de pauperización de las condiciones de trabajo, el fenómeno de la desocupación recrudeció al finalizar la dictadura militar y se proyectó durante el nuevo gobierno democrático.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Todos los datos referidos al empleo en el sector público fueron elaborados sobre la base de los datos presentados por Osatinsky, 2010, p. 222.

<sup>19</sup> El Estado provincial propició, durante la década de 1980, algunas leyes regulatorias – además del decreto de Maquila Oficial– específicas de las actividades laborales. En abril de 1983 se reglamentó la ley que establecía el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial. Dicho instrumento establecía disposiciones relativas a salarios, antigüedad, adicionales, horas extras, feriados y días no laborales, asignaciones familiares, asignaciones por luto, vacaciones, licencias, beneficio por lactancia, entre muchas otras disposiciones que hacían a las condiciones de trabajo de los empleados estatales. En la misma línea, durante el año 1991 se promulgaron una serie de normativas que regularon la jornada laboral y las actividades ejercidas por profesionales (ingenieros, fonoaudiólogos, arquitectos, agrimensores, entre otras). El espíritu de la legislación fue reglamentar la actividad, títulos, matrículas, formación de colegios profesionales, aranceles, infracciones y normas de ética profesional.

<sup>20</sup> La flexibilidad laboral o desregulación del mercado de trabajo, hace referencia a un modelo de derechos laborales que elimina trabas y regulaciones para contratar y despedir empleados por parte de las empresas y organizaciones privadas. La flexibilidad laboral está relacionada con las medidas referentes a la libertad de contratación y el contrato individual de trabajo, para flexibilizar los mecanismos logrados por los sindicatos en el siglo XX, esperando con ello mantener el crecimiento de todo el sector privado.

<sup>21</sup> Cuando hablamos de “pauperización” nos referimos a un proceso general de

Los desafíos para la nueva administración debían dirigirse a recomponer el salario real, duramente castigado durante la dictadura y, ante la profundización del desempleo, propiciar políticas públicas capaces de solucionar el problema o por lo menos contener los efectos sociales y económicos negativos. El desempleo, sumado a un salario real bajo, redujo la participación de los asalariados en el ingreso nacional y el incremento de la participación de los cuentapropistas que aumentaron en un 33,7% (Osatinsky, 2010).<sup>22</sup>

Si consideramos el total de la población urbana de Tucumán se observa que, por lo menos durante la segunda mitad de la década, el desempleo se incrementó en un 50%. Al respecto, Osatinsky sostiene que incluso desde principios de 1980 y hasta finalizar la década, el desempleo en el Gran San Miguel de Tucumán se habría duplicado (Ver Tabla N° 16 en Anexo). Al interior de esta aseveración podemos desglosar lo que sucedía en los diferentes grupos de individuos que buscaban trabajo. En este sentido, se advierte que, en términos porcentuales, la realidad de los jefes de hogar desocupados fue considerablemente más acuciante que la de las mujeres, en virtud de que los primeros duplicaron el desempleo en la segunda mitad de la década, mientras que las mujeres sólo lo hicieron en un 16%. La situación de los jóvenes resultaba claramente preocupante si consideramos que en 1984 uno de cada cinco jóvenes no encontraba trabajo, mientras que, al finalizar la década, uno de cada cuatro no lo hacía.

Otro fenómeno que comenzó a ser visiblemente importante en la década de 1980 fue el subempleo.<sup>23</sup> Este indicador creció durante el período desde valores cercanos al 4% en 1980 y alcanzó alrededor de 14 puntos porcentuales al finalizar la década. Estos datos refuerzan la idea de que las políticas regresivas empujaban a los trabajadores al desempleo y los impulsaban a buscar alternativas por cuenta propia, generalmente “changas”, que si bien ayudaban a las familias a contar con algunos ingresos no alcanzaban a cumplir las expectativas laborales de los trabajadores (Ver Gráficos N° 4 y 5 en Anexo).

---

empobrecimiento. “Pauperización” utilizada para caracterizar el mercado de trabajo se refiere al empobrecimiento de las condiciones de trabajo o, como definimos anteriormente, a la precarización de dichas condiciones.

<sup>22</sup> El cuentapropismo no es malo en sí mismo porque puede tratarse de profesionales altamente calificados que ejercen sus labores por cuenta propia. Lo negativo es cuando aumenta el cuentapropismo de subsistencia, es decir, que personas que quedaron desempleadas en actividades formales deben buscar alternativas de trabajo con salarios muy bajos, sin estabilidad laboral, ni beneficios de seguridad social.

<sup>23</sup> Se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, que desean trabajar más horas y se encuentran disponibles para hacerlo.

En lo que respecta al empleo, los varones duplicaron los porcentajes de población empleada respecto de las mujeres. Al finalizar la década, los niveles de subempleo masculino se vieron considerablemente incrementados en un porcentaje que alcanzó el 57%, mientras que en el caso de las mujeres el subempleo aumentó 37%. Por último, en relación a la sobreocupación, es decir, quienes trabajaban más de 45 horas semanales, los niveles fueron superiores en el caso de los hombres. Sin embargo, el cambio entre 1984 y 1989 fue similar en ambos casos, alcanzando el 9% entre ambos años. (Ver Tabla N° 17 en Anexo)

El comportamiento del salario fue un elemento de conflicto que caracterizó a la década de 1980. La problemática, que no se repetirá en la década siguiente, fue la creciente inflación que, lejos de ser contenida, a finales de los '80 se descontroló produciendo episodios hiperinflacionarios. La creciente escalada de precios hizo que los sueldos perdieran capacidad de compra, es decir, que con el salario mensual se pudo comprar cada vez menos bienes, puesto que estos últimos se encarecían continuamente.

Este panorama nacional se agudizó a nivel provincial debido a las dificultades del gobierno para pagar los sueldos de la administración pública. Ante la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones, el gobierno de Riera comenzó, en 1986, a emitir el Bono de Cancelación de Deudas (BOCADE o simplemente "bono"). Era una moneda emitida por el gobierno, válida sólo en el territorio provincial, que se utilizaba de manera paralela al austral, que era la moneda nacional. Si bien la emisión de BOCADE al gobierno le permitía hacer frente a las deudas, los costos para la comunidad fueron muy altos. La desequilibrada emisión de la moneda local provocó que la misma pierda valor y generó el conocido "desagio", es decir, que el bono valía menos del valor impreso en el billete. Esto produjo la pérdida de la capacidad de compra del bono y enfrentó a quienes cobraban en BOCADE a sobreprecios por los bienes adquiridos. A esta situación se sumó la caída del salario real en la provincia que fue, entre 1984 y 1989, de un 27%.

El empeoramiento de las condiciones laborales llevó, entonces, a una serie de manifestaciones por parte de sectores trabajadores que, de alguna manera, marcaron el rumbo de las demandas sociales. A nivel nacional, y con repercusiones locales, se llevaron adelante trece paros generales convocados principalmente por los sindicatos nucleados en la

Confederación General de Trabajadores (CGT). Las huelgas generales compartieron durante los '80 prácticamente las mismas consignas contra las limitaciones a las libertades sindicales, las extensas jornadas de trabajo con mínimos salarios, el avance de la inflación e incremento de la pobreza e indigencia y el aumento de la desigualdad de ingresos. Al finalizar la década se sumaban a la lista los reclamos por la hiperinflación, por los niveles de desocupación y subocupación y por el empeoramiento general de las condiciones laborales (Carrera, 2002).

Los sindicatos de Tucumán adhirieron a las huelgas generales declaradas en el país. En enero de 1986 la CGT llamó a marchar en contra de los planes de ajuste recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La importancia de la provincia en lo que sería el enfrentamiento de la CGT y el gobierno nacional llevó al diario local a considerar que “Tucumán fue uno de los teatros donde repercutió la contienda entre esos protagonistas”.<sup>24</sup>

Uno de los sectores que protagonizó resonantes protestas fue el de los maestros. En marzo de 1988 comenzó la huelga recordada como el “maestrazo”, la cual se extendió más de 40 días y en la que participaron cerca de 530.000 docentes de todo el país (*Naranja Docentes de Avellaneda*, 2008). El reclamo se centró en el aumento salarial equivalente a la inflación y el incremento del presupuesto educativo. En la provincia el acatamiento de las medidas fue contundente. Los docentes llegaron a suspender las clases alrededor de 71 días, lo que equivalía al 43% del total anual de clases.<sup>25</sup>

Otro de los conflictos sobresalientes del período fueron los levantamientos policiales que, como el resto de los sectores, demandaron recomposiciones salariales. El primero de ellos se realizó en ocasión de la visita presidencial a la provincia en 1984. El grado de conflictividad fue creciendo dado que el gobierno tomó una actitud confrontativa contra los manifestantes. Luego de 10 días de reclamo, el conflicto se resolvió gracias a la asistencia del Estado nacional (Sosa Martos, 2016). Pese a haber sofocado el levantamiento, la de 1984 no fue la única huelga policial en la provincia. Entre 1986 y 2008 se sucedieron 30 protestas colocando a Tucumán como la segunda provincia con mayor conflictividad policial, luego de la provincia de Buenos Aires (*Centro de Estudios Nueva*

---

<sup>24</sup> *La Gaceta*, 27.04.2014 (<http://www.lagaceta.com.ar/nota/588242/politica/enero-se-estreno-paro-alfonsin.html>). Consultado el 14.03.2017)

<sup>25</sup> *La Gaceta*, 10.12.2003 (<http://www.lagaceta.com.ar/nota/60358/argentina/riera-fue-padre-bono-intervencion-acabo-domato.html>). Consultado el 14.03.2017)



*Mayoría*, 18.04.2008).

Otros dos episodios remiten al elevado grado de conflictividad social en la provincia. En primer lugar, el profundo deterioro económico y social ocurrido como consecuencia de la hiperinflación de 1989 recrudeció la situación de los sectores más vulnerables y, por consiguiente, se generó una ola de saqueos que entre 1989 y 1990 superaron los 60 episodios (Centro de Estudios Nueva Mayoría, 21.12.2001). El segundo momento, también durante los últimos años de la década, se relacionó con la postergación de los incrementos salariales a empleados públicos durante la gestión del gobernador José Domato (1987-1991). Este freno a los aumentos de sueldos y los retrasos en el pago a jubilados ocasionaron una serie de huelgas que, sumadas a una profunda crisis sanitaria (desnutrición y brote de hepatitis), pusieron al gobierno nacional en la necesidad de intervenir la provincia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *La Gaceta*, 10.12.2003 (<http://www.lagaceta.com.ar/nota/60358/argentina/riera-fue-padre-bono-intervencion-acabo-domato.html>). Consultado el 14.03.2017)

#### **4. La composición del mercado laboral tucumano en la década de 1990**

La década de 1990 supuso cambios importantes en el mercado laboral tucumano. Las políticas de ajuste llevadas adelante por el gobierno nacional profundizaron tendencias que venían perfilándose desde las décadas de 1970 y 1980 y, a diferencia de lo que sucedió en los '80, el gobierno provincial no tuvo herramientas para contener, al menos parcialmente, el deterioro económico y social.

Las tradicionales actividades económicas de la provincia vieron reducido el personal empleado entre 1991 y 2001. La caída de la población ocupada en el sector agrícola y en el sector industrial fueron por lejos las más importantes del período, ambas alcanzaron una reducción del 30%. Los otros dos sectores que redujeron personal fueron electricidad, agua y gas que, a raíz de las privatizaciones, en el año 2001 contaba con un 5% menos de trabajadores. La reducción en el sector comercial fue muy pequeña, del orden del 3% (Ver Gráfico N° 6 en Anexo).

Los sectores que incrementaron sus empleados muestran claramente cuáles eran los objetivos de las políticas económicas de la década del '90. El crecimiento de más del 50% en la rama finanzas y seguros muestra que el modelo económico establecido por el presidente Carlos Saúl Menem (dos mandatos entre 1989-1999) poco tenía de “revolución productiva”<sup>27</sup> y mucho tenía de revalorización y especulación financiera. Otro sector que vio incrementada su planta de trabajadores fue el de transporte y comunicaciones, cuya nómina de empleados creció casi un 40%.

La década del '90 significó, sin duda, un cambio en el mercado laboral tucumano. Mientras que en los '80 tres cuartas partes de la mano de obra empleada lo hacía en los sectores de agricultura, manufacturas, comercio y servicios comunales, en los '90 el sector industrial quedó relegado, concentrándose la población ocupada tucumana en sólo tres: agricultura, comercio y servicios que concentraban casi el 70% de la misma.

---

<sup>27</sup>Esa fue una de las promesas de campaña de Carlos Menem. Mediante la “revolución productiva” el candidato prometía sacar al país de la crisis económica crónica y poner en marcha un proyecto económico y político nacional y popular.

El comportamiento de la rama servicios comunales, sociales y personales también es sugerente respecto del panorama laboral del período. Mientras en la década anterior el incremento del personal en ese sector fue de casi un 50%, en la década del '90 sólo lo hizo en un 2,5%. Surge de estos datos que el empleo público no sufrió modificaciones, manteniéndose en torno al 34% del empleo total con lo cual podemos pensar que el incremento de los trabajadores en esta rama se debió al aumento de los servicios personales como el empleo doméstico (Osatinsky, 2012).

Así como sucedió en la década anterior, la cantidad de hombres que formaban parte de la población ocupada duplicó a la de mujeres. En efecto, el empleo tucumano contaba con un 65% de hombres y un 35% de mujeres. Sin embargo, ocurrieron algunos cambios importantes. El crecimiento de la ocupación de la mujer entre 1991 y 2001 no fue tan grande como en la década pasada. Entre 1980 y 1991 la participación femenina en la PEA se incrementó un 37%. Esto no volvió a darse en la década del '90, marcándose un estancamiento en la incorporación de ellas al mercado laboral. En efecto, entre 1991 y 2001 el porcentaje de mujeres en el empleo tucumano sólo se incrementó un 6% (Ver Gráfico N° 7 en Anexo).

Del mismo modo que observamos para la década del '80, en nueve de las diez ramas de actividad la participación femenina fue inferior al 40% y las ocupaciones de "mujeres" y de "hombres" continuaban siendo las mismas. Más del 60% de la población empleada en los servicios comunales eran mujeres que desarrollaban tareas en el Estado, en el rubro de empleo doméstico y en educación. En este punto resulta importante la reducción del empleo doméstico entre ambos censos. Mientras que en 1991 había 31.000 empleadas domésticas, ese número se redujo a 25.000 en 2001, significando una merma de casi un 20%. Las ramas de comercio y finanzas ocupaban un 30% de mujeres, porcentaje que no sufrió modificaciones importantes entre ambos censos. La importancia de la participación femenina en actividades no especificadas, pero sobre todo el incremento de la misma desde comienzos de los '80, refuerza la idea de una variedad de tareas difíciles de unificar en una sola rama.

El trabajo por cuenta propia siguió siendo durante la década de 1990 la alternativa que tenían los individuos que quedaban desempleados. Sin embargo, por aquellos años la gravedad de los

problemas laborales hacía que ni siquiera se encontraran alternativas para ejercer actividades por cuenta propia. Mientras que entre 1980 y 1991 el cuentapropismo se incrementó un 35%, en la década de 1990 se redujo un 9%.

Una novedad de esos años fue el avance del empleo informal o empleo no registrado. La pérdida de la estabilidad laboral y de beneficios de la seguridad social (jubilación, pensión, obra social, etc.) enfrentaron a los individuos a altos niveles de incertidumbre sobre su futuro laboral pero también sobre la calidad de vida de sus familias. A más largo plazo, las consecuencias de la informalidad de los '90 se reflejarían en los cientos de miles de personas que estando en edad de jubilarse no podían hacerlo porque no poseían los años de aportes necesarios para retirarse.

Así como sucedió en la década anterior, el creciente desempleo en las actividades rurales provocó que los trabajadores migraran a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Entre 1991 y 2001 la población rural de la provincia se redujo un 16%, demostrando que la migración persistía como una alternativa frente a los crecientes niveles de desocupación.

## **5. Avance del neoliberalismo en la dinámica laboral, desregulación y flexibilización en los '90.**

En la década de 1990, los cambios que venían perfilándose desde los '80 terminaron por consolidarse. Los intentos incipientes, pero certeros, de desvincular al Estado de las regulaciones económicas culminaron con la consolidación del Plan de Convertibilidad de 1991 implementado por el presidente Menem. Este plan involucró una serie de medidas que generaron un profundo cambio en el rol del Estado. Bajo las premisas de constituir un “Estado eficiente” y de terminar con los procesos inflacionarios se implementó un nuevo esquema cambiario y monetario combinado con una serie de reformas estructurales del Estado (Basualdo, 2003). Las novedades tenían que ver con el cambio de signo monetario –reemplazándose el austral por el peso– y con la fijación del tipo de cambio –otorgando por ley la de paridad del peso con el dólar–. De esta manera, a partir de la Ley de Convertibilidad un peso era igual a un dólar, sistema de cambio fijo que detuvo la inflación mientras se mantuvo vigente.

Por otra parte, con el objeto de construir un “Estado eficiente” se

“achicaron” sus funciones retirándose de la provisión de servicios, considerada la raíz de su ineficiencia. Esto conllevó un amplio proceso de privatizaciones (gas, luz, agua, transportes, seguridad social, comunicaciones, recursos naturales) con el doble objetivo de pagar con sus ventas parte de la deuda externa y sanear el déficit fiscal.

Otro eje de la reforma del Estado fue la desregulación. Este fenómeno significaba que se dejarían de imponer regulaciones al funcionamiento de los mercados que tradicionalmente consistían en subsidios o promulgación de leyes que actuaran sobre las fuerzas de la oferta y la demanda. Sin duda, el proyecto emblemático en este sentido fue la Ley de Flexibilización Laboral de 1996, con la que se buscaba eliminar las trabas que se imponían a la contratación y despido de la mano de obra. Las medidas para lograrlo consistían en eliminar las paritarias, examinar los convenios colectivos de trabajo, modificar el régimen de indemnizaciones, reducir las modalidades de contratos temporarios y desregular las obras sociales, dejando libre la elección por parte de cada beneficiario.<sup>28</sup>

La desregulación incidió decididamente en el comportamiento del mercado laboral argentino y tucumano durante la década bajo estudio.<sup>29</sup> Con las herramientas desregulatorias se puso fin a las instituciones políticas, económicas y sociales que caracterizaron al Estado de Bienestar<sup>30</sup> impulsando un nuevo orden social que privilegió al sector privado sobre el público (Mariotti, 2011). Si bien este tipo de políticas ya se podían advertir en décadas anteriores, tomaron carácter oficial en 1991 mediante la ley de emergencia económica, la ley de reforma del Estado y la ley de flexibilización laboral (Mariotti, 2011, p. 122).

---

<sup>28</sup> *La Nación*, 31.08.1996 (<http://www.lanacion.com.ar/168498-menem-lanzo-su-propuesta-de-flexibilizacion-laboral>. Consultado el 13.03.2017)

<sup>29</sup> Cuando hablamos de desregulación hacemos referencia a la pérdida de las herramientas para regular los mercados, pero de manera más profunda se alude a la idea de que el Estado no debe intervenir en los mercados y debe dejar actuar libremente a las fuerzas de la oferta y la demanda.

<sup>30</sup> Estado de Bienestar se refiere a una forma de gobierno en la cual el Estado se hace cargo de los servicios y derechos de una gran parte de la población considerada humilde o empobrecida. Para el Estado de Bienestar hay tres elementos que son relevantes: la democracia, es decir, el mantenimiento de formas políticas no autoritarias ni autocráticas; el bienestar social, es decir, la provisión a la sociedad de la ayuda económica y social necesaria para progresar; el capitalismo, ya que no lo considera necesariamente un problema. Así, una mayor intervención estatal en la economía es una de las directrices más importantes junto con la regulación de cuestiones como el empleo, la producción, el acceso a la vivienda, la educación y salud pública.. (<http://www.definicionabc.com/historia/estado-de-bienestar.php> (Consultado el 17.03.2017))

Este avance del neoliberalismo produjo un desplazamiento de las políticas estatales a mecanismos de crecimiento y desarrollo fundados en la acción privada. Con ello se profundizaron procesos que ya habían comenzado a funcionar en la década pasada, como el de concentración del capital, la distribución regresiva del ingreso, el crecimiento del desempleo, subempleo, tercerización, avance de la informalidad y una profunda desindustrialización producida por la apertura indiscriminada de la economía y la pérdida de los mecanismos de aliento a la industrialización (Mariotti, 2011). La profundización de los problemas de empleo junto con el incremento de la desigualdad y de la pobreza se combinaron con el crecimiento del PBI, consolidando una década de “crecimiento con desarticulación social” (Teubal y Rodríguez, 2001).

En este contexto, la economía tucumana acompañó la tendencia nacional y experimentó un crecimiento en la producción de bienes y servicios hasta el año 1998 y una disminución en la actividad económica desde 1999. Entre 1991 y 1995 el PBG aumentó un 42%, mientras que hacia 1998 el crecimiento respecto de principios de la década fue del 60%. Ese ritmo no pudo mantenerse y hacia 2001 se registró una disminución del 38% respecto de 1991.

El crecimiento de la economía tucumana hasta 1998 se debió al avance del sector terciario, en consonancia con el proceso de tercerización por el que atravesaba el país. El sector comercial, pese a haber reducido el número de establecimientos, incorporó alrededor de un 14% más de mano de obra, mientras que el sector servicios, como habíamos adelantado, fue el “gran ganador” del período, incrementando el número de establecimientos y el personal empleado en aproximadamente 50% en el caso de los transportes, almacenamiento y comunicaciones y un 60% en el caso de las finanzas.

Dentro del sector primario, la producción citrícola y la producción sojera continuaron creciendo ininterrumpidamente durante la década. Las condiciones de demanda y de precios internacionales se mantenían, “bondades” a las que se sumó la política de apertura externa llevada adelante por el Estado Nacional, es decir, la reducción e incluso eliminación de las retenciones para la exportación y de los aranceles a la importación. La ocupación en el caso de ambas producciones tuvo un comportamiento contradictorio. Por un lado, el incremento propio de la actividad hacía que naturalmente se emplee más mano de obra, pero, por otro lado, se expulsaba trabajadores por dos vías: la primera como

consecuencia de la incorporación de maquinaria, que se veía abaratada por la reducción de los aranceles; y la segunda por la profundización del proceso de concentración de la producción que determinó que el 50% de la superficie con limones sea controlada por sólo cuatro propietarios y que miles de familias trabajadoras pierdan sus campos y tengan que salir a buscar trabajo (Osatinsky, 2010).

En relación a las condiciones de empleo y de trabajo, en el sector citrícola se mantuvieron las mismas características de la década pasada: la fuerte estacionalidad de la ocupación y la preponderancia del trabajo masculino. La novedad en este tipo de trabajo fue la creciente ocupación de jefas de hogar en las actividades citrícolas. La situación de ellas fue de una mayor vulnerabilidad frente a la de los hombres jefes de hogar, dado que tenían que salir a trabajar por salarios bajos y además continuar con las tareas domésticas y reproductivas (Vázquez Lava, 2004).

El cultivo de caña de azúcar fue, sin duda, uno de los componentes del sector agrícola más golpeado. La desregulación económica tuvo como objetivo generar mecanismos de mercado en una actividad cuyo elemento constitutivo fueron las regulaciones estatales (Correa Deza y Campi, 2010), perjudicando a los pequeños campesinos y zafreros que no tuvieron las condiciones para sobrevivir en situaciones de desregulación, a diferencia de los grandes productores diversificados o con posibilidades de transformarse. Sumado a este panorama, se desencadenó un período de crisis de sobreproducción de materia prima sistemática, poniendo de manifiesto, una vez más, las imposibilidades del sector de sobrevivir sin regulaciones estatales (Rofman, 1999).

La concentración de la propiedad de la tierra y la formación de los “megaproduktores” (productores agrícolas que poseían campos de entre 2.000 y 9.000 hectáreas) provocó que casi un 70% del área cultivada con caña correspondiera al 10% del número de propietarios (Rofman, 1999). Dado que las que desaparecieron fueron las pequeñas y medianas explotaciones, con la consiguiente pérdida de mano de obra familiar, la reducción de los trabajadores empleados permanentemente en las explotaciones fue de un 65% entre 1988 y 2002 (Giarraca et al. 2001 y Osatinsky, 2010).

Otro de los impactos que tuvo la desregulación en las tareas agrícolas de la actividad azucarera durante la década del ‘90 vino de la mano de los cambios técnicos, sociales y organizativos de la región. Estas

transformaciones estuvieron relacionadas con la mecanización en la recolección de la cosecha, la introducción de agroquímicos en el proceso agrícola y la emergencia de nuevos actores económicos. Los cambios más notables estuvieron en el plano tecnológico, verificándose un aumento en la cantidad y el uso de tractores y de cosechadoras integrales; se estima que alrededor del 20% de las explotaciones utilizaban este tipo de cosechadoras para levantar la zafra (Giarraca et al. 2001). Esta situación planteó nuevamente la problemática de incorporar maquinaria y reemplazar el trabajo humano. En relación a las formas de cosecha, en 1988 aproximadamente el 82% se hacía de manera manual mientras que en 1996 ese porcentaje se vio reducido al 43%. En el corte y la carga mecánica hubo un importante avance respecto de 1988 y claramente el ítem que cobró mayor significancia fue la incorporación de la cosechadora integral que reemplazó gran cantidad de trabajadores (Giarraca et al. 2001).<sup>31</sup>

Los fenómenos de desregulación y de tecnificación, con el objetivo de reducir los costos e incrementar la productividad laboral, produjeron en el seno de la industria azucarera, por un lado, la sustitución de trabajo por capital –lo que redujo la cantidad de personal ocupado en la actividad– pero, por otro lado, cambió el perfil de los trabajadores ocupados (Giarraca et al, 2001, p. 311). Este panorama resultaba atrayente para aquellos sectores que pudieron subsistir produciendo, sin embargo, el sector mayoritario compuesto de pequeños y medianos productores de caña, sumado a aquellos trabajadores que se empleaban de manera permanente o transitoria para las tareas agrícolas y en menor medida para las industriales, no corrieron la misma suerte. Si bien no existen cifras oficiales, la FOTIA estimó que los zafreiros transitorios alcanzaron la suma de 45.000 en la década del '70 mientras que en la del '90 se habían reducido, aproximadamente, a 15.000. (Giarraca et al., 2001, p. 313 y Rofman, 1999, p. 164).

Pese a todos estos cambios algunos rasgos del mercado laboral azucarero se mantuvieron: la figura del contratista (intermediario entre los trabajadores y los empleadores) continuaba siendo importante para acercar la oferta a la demanda; gran cantidad de trabajadores se

---

<sup>31</sup> Recordemos que la cosecha manual de la caña tradicionalmente empleaba grandes dotaciones de mano de obra estacional que implicaba un gran movimiento de trabajadores y sus familias. Los cosecheros llegaban desde las provincias vecinas, sobre todo Santiago del Estero y Catamarca hasta que a partir de la década del '60 y '70 comenzó a incorporarse la cosecha semimecánica e integral de la caña, produciendo un importante desplazamiento de mano de obra (Rofman, 1999).



empleaban de manera informal; la estacionalidad de la mano de obra continuó cubriéndose con migrantes de provincias vecinas; los salarios eran bajos y variaban sensiblemente según las distintas categorías laborales; y persistieron los bajos niveles de sindicalización (Giarraca et al., 2001).

El panorama descrito provocó nuevamente la cohesión de industriales y productores agrícolas en defensa del empleo y de las condiciones de trabajo en el sector. Estos conflictos propiciaron la alianza entre los sectores en la búsqueda de respuestas por parte del Estado provincial al cual le demandaban medidas regulatorias que encaucen nuevamente la actividad azucarera. Al malestar generado por la desregulación se sumó el avance de las negociaciones tendientes a profundizar el área de libre comercio entre los países del Mercosur, hecho que preocupaba a los productores cañeros, a raíz de la posible competencia con el sector azucarero brasileiro.

El sector hortícola continuó produciendo principalmente tomate y frutillas. La posibilidad de incorporar tecnología de punta en estas producciones hizo que, pese a estar destinadas al mercado interno, no desaparezcan. Dos novedades se dieron en estos cultivos: por un lado, el ingreso de productores extrarregionales dedicados exclusivamente al cultivo de frutilla que pudieron aprovechar las condiciones macroeconómicas para concentrar la producción, determinando que el 50% de la superficie cultivada esté en manos de sólo cuatro empresas (Rivas, 2001). La segunda novedad tuvo que ver con la ampliación de la superficie hortícola hacia el Valle de Vipos, hecho que les permitió a los trabajadores bolivianos permanecer ligados a las producciones durante todo el año, propiciando que si las condiciones económicas eran buenas pudieran acceder a la propiedad de la tierra y se radicaran en la provincia (Rivas y Natera Rivas, 2007).

La actividad industrial también atravesó un período de retroceso durante los '90. La participación del sector en el PBG tucumano se redujo fuertemente en la segunda mitad de la década como consecuencia de la falta de políticas industriales en general y de la desregulación azucarera en particular. Este retroceso se manifestó en el mercado de trabajo industrial produciendo un descenso del 30% en el empleo entre 1991 y 2001. Sin duda, la caída más pronunciada durante toda la década.

A tono con lo que fueron las políticas de retiro del Estado en los

‘90, el empleo público no creció de la manera en que lo hizo en la década anterior. Según datos consignados en el Anuario Estadístico de la Provincia de Tucumán, entre 1990 y 1999 los empleados públicos aumentaron de 44.000 a 46.000 y en 2002 alcanzaron los 47.000, aproximadamente. Este incipiente aumento no permitió, como en la década anterior, contrarrestar las dificultades laborales derivadas de las políticas regresivas del gobierno nacional. En los primeros años del nuevo siglo, el empleo público volvió a crecer pero de manera extremadamente reducida en relación a la profunda recesión que se vivió en los años previos y posteriores a la crisis de 2001. Otro elemento importante de la década, que muestra claramente los intentos de reducción del rol del Estado, fue una serie de leyes y decretos que dejaban sin efecto las normativas regulatorias de las profesiones que habían sido promulgadas en la década anterior.

Lo sucedido durante los años ‘80 y la política económica de la década del ‘90 se combinaron para generar, en el mercado de trabajo nacional y provincial, uno de los contextos más regresivos del siglo. El crecimiento de la desocupación en los años ‘90 fue más pronunciado que el de la década de 1980. Durante aquellos años Tucumán mantuvo en todo el período niveles de desempleo superiores al total de los aglomerados urbanos del país. Comenzando con 12% de desempleo, la década finalizó con más de 15%; sin embargo, no se puede dejar de destacar que al promediar la década se alcanzaron niveles superiores al 20%, cifra similar a la registrada durante la crisis de 2001. Estos picos de desempleo en la zona urbana de la provincia coincidieron, el primero con el “Efecto Tequila”, crisis mexicana que golpeó fuerte la economía nacional y el segundo con la crisis de 2001 (Ver Gráficos N° 8 y 9 en Anexo).

Así como ocurrió con el subempleo en los años ‘80, la tendencia en los ‘90 fue creciente, alcanzando valores superiores a los 20 puntos. En este caso, la situación tucumana también fue peor respecto del total de aglomerados del país. Por su parte, la precariedad laboral en los ‘90, más allá del desempleo, subempleo y sobreempleo, adquirió una nueva dimensión que se hizo extremadamente significativa durante aquellos años: el empleo informal o empleo “en negro”. Recordemos que la problemática asociada a esta variable se relacionaba con la falta de descuentos en concepto de obra social y jubilación. La ausencia de obra social ponía en situación de vulnerabilidad a las familias en caso de enfermedad o, incluso, en lo que respecta a los controles anuales para

prevenir enfermedades. La falta de aportes jubilatorios, si bien influiría en los individuos a más largo plazo, colocaba a los trabajadores en la incertidumbre de no contar con ingresos al momento de retirarse de la población económicamente activa, vulnerando el derecho a una vejez digna.

Si bien a nivel país y región la informalidad creció ininterrumpidamente, la situación tucumana fue claramente más negativa. El aumento exponencial de los primeros años hizo que la informalidad pase del 30% y supere el 50% de los empleados en 1993. A partir de ese año, si bien hubo una caída de la informalidad, recién en 1998 se alcanzaron valores cercanos al promedio nacional. Hasta finalizar la década, los niveles de empleo “en negro” seguirían altos oscilando entre el 40 y el 50% de la población ocupada (Ver Gráfico N° 10 en Anexo).

Por su parte, el sobreempleo tucumano tuvo un comportamiento muy cíclico en la década de 1990 que alternó momentos de crecimiento con caídas, acompañando siempre al promedio nacional. El comienzo de la década y el período 1995-1998 registraron aumentos constantes de las horas de trabajo por encima de las 40 horas semanales, mientras que 1993-1995 y 1998-2002 registraron disminuciones del sobreempleo (Ver Gráfico N° 11 en Anexo).

Los primeros años de los ‘90 y, sobre todo promediando la década, fue una etapa de crecimiento económico y eso se plasmó en el comportamiento del desempleo, empleo informal y sobreempleo que se redujeron y del subempleo que se mantuvo constante. La desarticulación social se pondría de manifiesto a partir de la segunda mitad de la década y, sobre todo, al comenzar el nuevo siglo. Durante esos años, el ritmo de incremento de la desocupación se aceleró y se alcanzaron niveles de cercanos al 25%; por su parte, el ritmo de crecimiento del trabajo informal sobrepasó el 60% en los primeros años de los 2000.

Como ocurría en la década de 1980 el desempleo fue sistemáticamente mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los varones, que siempre tuvieron entre 3 y 4 puntos menos. La pequeña “primavera” por la que transcurrió el desempleo entre 1995 y 1998, años entre los cuales se redujo de 22% a 15% en el caso de las mujeres, fue igual de importante entre los varones, disminuyendo de 18% a 10%. En definitiva más allá de los niveles, la problemática del desempleo para las mujeres no registró diferencias significativas respecto de la de los hombres. El análisis del sobreempleo y del subempleo tampoco mostró

diferencias significativas (Ver Gráficos N° 12 y 13 en Anexo).

En contraposición a lo sucedido en la década del '80, la problemática salarial en los '90 fue menor como consecuencia de la inexistencia de inflación. A la estabilidad del poder de compra del salario se sumaron las diversas alternativas de bienes disponibles como consecuencia de la baja de los aranceles a la importación. El mercado interno se llenó de productos asiáticos que se conseguían a precios mínimos. Un emblema en este sentido fueron los negocios “todo por dos pesos” que ofrecían a los consumidores un sin fin de productos por la módica suma de dos pesos. El consumo era posible y las condiciones macroeconómicas hacían que efectivamente el salario mantenga su poder de compra. La Ley de Convertibilidad logró anclar la inflación en 1992 y la salida de la misma ocasionó una fuerte caída de los salarios reales del orden del 40%.

En relación a la década del '80, el salario real en la provincia se redujo en un 25%. Sin embargo, pese a tener durante la década del '90 niveles salariales inferiores que los del '80, la estabilidad salarial del período mitigó notablemente el empeoramiento de las condiciones laborales. Lo que sí fue –y sigue siendo– un elemento de conflicto fueron las profundas diferencias salariales entre la provincia y el resto del país. Mientras los salarios reales a nivel país oscilaron entre 550 y 650 pesos, los de Tucumán lo hicieron entre 400 y 450 pesos, lo que implicaba diferencias de hasta un 50% en favor del resto del país. Tan bajo era el nivel salarial de Tucumán, que también resultaba menor que el salario promedio del interior del país, sólo que en este caso las diferencias alcanzaban el 25% en favor de las provincias del interior (Ver Gráfico N° 14 en Anexo).

Durante esta década, los BOCADE continuaron circulando y generaron los mismos problemas que los desatados en su primera emisión. A esto se sumó, al finalizar la década, la circulación de los “tickets canasta”, una suerte de vales con diferente valor nominal destinados para uso exclusivo en los supermercados. La ley de creación de los vales estipulaba que serían utilizados sólo para pagar los sueldos de la administración pública y que el monto en tickets no podía exceder el 20% del salario. La restricción de su uso quedó sin efecto y los vales comenzaron a circular como una nueva moneda, aceptada con un desagio que reducía la capacidad de compra de los sectores de menor ingreso.

Las huelgas y protestas del período tuvieron como rasgo propio que, a diferencia de las huelgas en la década del '80, no se realizaron con el objetivo de obtener incrementos salariales, sino que cuestionaban las medidas económicas, laborales y sociales implementadas por el gobierno nacional. Por lo menos en lo que respecta a las huelgas generales del período, todas tuvieron consignas de oposición a las políticas del gobierno y a los efectos que generaban en las condiciones de trabajo. Proponían defender las conquistas laborales, oponerse a la flexibilización laboral y, casi al finalizar la década, los reclamos estarían centrados en la generación de puestos de trabajo o en la obtención de subsidios para paliar la situación de los desocupados (Carrera, 2002).

A nivel local hubo tres sectores que generaron momentos de alta conflictividad social. En primer lugar, y como venía sucediendo desde mediados de la década de 1980, la policía de la provincia sería protagonista de numerosas protestas que alcanzaron el mayor nivel entre 2005 y 2006. Los episodios de principios de la década son recordados por haber sido conducidos por el comisario Mario “Malevo” Ferreyra, sin embargo, durante la gobernación de Ramón “Palito” Ortega (1991-1995) se pudo normalizar la policía y encarcelar al “Malevo”.<sup>32</sup>

El segundo sector que generó movilizaciones de envergadura fue el docente. La provincialización de la educación que se produjo durante los '90 sobrecargó presupuestariamente a las provincias que debieron hacerse cargo de una parte del sistema educativo que antes no asumían. La presión sobre el fisco provincial era preocupante dado que debió afrontar la carga salarial docente. En este sentido, los reclamos eran de diversa índole: por el pago de salarios en tiempo y forma; la defensa de la educación pública y el incremento del presupuesto educativo (Nardacchione, 2012). Uno de los puntos más álgidos en el conflicto docente se produjo en el año 1998, con la instalación de la “Carpa Blanca” frente al Congreso de la Nación. En aquella ocasión, las huelgas docentes afectaron un 30% del dictado de clases y una de las alternativas para que los alumnos no pierdan el año lectivo fue recuperarlas los días sábados.<sup>33</sup> El sector azucarero también fue protagonista de huelgas y cortes de ruta durante la década de 1990 en reclamo por soluciones a la crisis por la que atravesaba. La recurrencia de este tipo de reivindicaciones se sumaba a las constantes demandas de los empleados

---

<sup>32</sup> *La Nación*, 14.04.1998

<sup>33</sup> *La Nación*, 30.09.1998

de la administración pública que exigían el pago de los salarios sin retrasos.<sup>34</sup>

## 6. Conclusiones

Aunque con problemáticas distintas en cada década, en los últimos 20 años del siglo XX las condiciones laborales en Tucumán sufrieron un empeoramiento continuo. En la década de 1980 la expulsión de trabajadores generada por las transformaciones productivas todavía encontraba cierta contención por el incremento del empleo público. Además, aunque por parte del Estado se observaban ciertos intentos de protección de los trabajadores, a través de la regulación de las actividades económicas, el retroceso económico se manifestó de igual manera y las consecuencias sobre el mercado de trabajo, en definitiva, fueron negativas. A pesar del incremento en el desempleo, durante estos años la demanda clave fue el salario, como lo expresaban las protestas de los trabajadores que reclamaban por su poder adquisitivo ante un contexto de inflación creciente.

En los '90 la dinámica económica de ajuste y desregulación se profundizó y, con ella, las consecuencias sobre el mercado de trabajo provincial, acentuándose el empeoramiento de las condiciones laborales que había comenzado en la década anterior. La apertura comercial, combinada con el total retiro de las regulaciones estatales, socavó la situación de los trabajadores. La demanda por trabajo en la provincia se vio, entonces, drásticamente reducida debido a una serie de factores. Entre ellos se destacó la desaparición continua de pequeños productores en favor de un progresivo incremento de la superficie sembrada por cultivos más modernos y tecnificados que requerían explotaciones de mayor tamaño y maquinaria sustitutiva del trabajo humano.

En este escenario, el estado provincial se mostró incapaz de absorber a los trabajadores de los sectores agrícola e industrial expulsados por el proceso y la provincia experimentó durante esta década altos niveles de desempleo, incluso más elevados que los registrados en el plano nacional. Además, si bien el sector servicios capturó gran parte de la masa laboral, lo hizo en un contexto de gran precariedad para los trabajadores, cuyas condiciones laborales en los '90 se caracterizaron por elevados niveles de subocupación, sobreempleo e informalidad. En este

---

<sup>34</sup> *Clarín*, 22.05.1999.

sentido, cabe destacar que el eje del conflicto laboral en esta década hacía referencia a las políticas del Estado y a los derechos laborales y no al poder adquisitivo como en los '80. Durante estos años, el salario se mantuvo estable como consecuencia de la Ley de Convertibilidad. No fue sino hasta el cambio de siglo que el poder adquisitivo de los trabajadores se vio fuertemente deteriorado.

## 7. Bibliografía

Basualdo, Eduardo: "Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa". *Revista Realidad Económica* n° 200, 2003.

Carrera, Nicolás Iñigo: "Las huelgas generales. Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización." *Pimsa 2001*, Documento de Trabajo No. 33, 2002.

Correa Deza, Florencia y Daniel Campi. "La economía azucarera argentina bajo el impacto de la crisis de 1930." *Actas del III Seminário de História do açúcar, Produção, trabalho e estrutura fundiária* (2010).

Ferrer, Aldo: *La economía argentina (Desde sus orígenes hasta principios del siglo, Vol. XXI)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2008.

Giarracca, Norma; Karina Bidaseca y Daniela Mariotti: "Trabajo, migraciones e identidades en tránsito: los zafreros en la actividad cañera tucumana". *Una nueva ruralidad en América Latina*, 2001, pp. 307-337.

IDEP Tucumán: "Informe especial: El limón en Tucumán, Argentina y el mundo". Instituto de Desarrollo Productivo. Tucumán, 2012.

Mariotti, Daniela: Estrategias sociales y acciones colectivas de la unión de cañeros independientes de Tucumán. Una historia sobre la herejía, la infamia y lo profano. Tesis doctoral inédita, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2011.

Nardacchione, Gabriel Andrés: "Las crisis provinciales y la nacionalización docente (1993-1997)." *Revista Pilquen* 15, 2012.

Osatinsky, Ariel: "El deterioro laboral en Catamarca y Tucumán (1980-2002)", en *Breves contribuciones del I.E.G.* N° 23, 2012, pp. 86-112.

Osatinsky, Ariel: "Los cambios en la estructura económica de Catamarca y Tucumán y sus efectos en la pobreza: Análisis comparado (1980-2002)". Tesis doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, 2010.

Panaia, Marta: "El impacto de la crisis fiscal en el trabajo en negro: las provincias de noroeste argentino", en *Sociologías*, no 4. Porto Alegre, 2000.

Rapoport, Mario: *Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2003*. Editorial Emecé, Buenos Aires, 2008, 3da. Edición.

Rivas, Ana Isabel y Juan José Natera Rivas. "Inserción de la inmigración boliviana en la actividad hortícola del Departamento de Lules (Tucumán, Argentina) a mediados de la década de los noventa." *Cuadernos Geográficos*, 41, 2007, pp. 113-131.

Rivas, Ana Isabel: "Cambios productivos dentro del contexto de la globalización del sistema agroalimentario: el caso de los productores hortícolas de Lules (Prov. de Tucumán, Argentina)." *Actas del 8vo. Encuentro de Geógrafos de América Latina*, 2001.

Rofman, Alejandro: *Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar*, Edit. Ariel. Buenos Aires, 1999.

Schvarzer, Jorge: *Implantación de un modelo económico: La experiencia argentina entre 1975 y el 2000*. AZ editora. 1998.

Sosa Martos, Alberto: "Dictadura y represión: el primer cierre de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, Tucumán 1989" en *Revista Testimonios*, Año 4, n° 4, Verano 2015, pp. 1-20.

Sosa Martos, Alberto: "Entre la esperanza Alfonsinista y la realidad ferroviaria. La reapertura de los Talleres de Tafí Viejo de 1984 desde la mirada de sus trabajadores". VII Reunión del Comité Académico de Historia, Regiones y Fronteras Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Tucumán, 2016.

Teubal, Miguel y Rodríguez, Javier: "Neoliberalismo y crisis agraria" en



Giarracca, N. y colaboradores, *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Editorial Alianza. 2001

Vázquez Laba, Vanesa: “La vulnerabilidad social de los/as asalariados/as citrícolas y sus familias en la provincia de Tucumán”. En *Revista Laboratorio. Estudios sobre cambio estructural y desigualdad social*, 2004, vol. 5, no 14.

## 9. Fuentes

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) OEA, 1976  
<http://www.dev-out.cl/sites/default/files/Listado%20CIIU%20y%20CIUO.pdf>

Centro de Estudios Nueva Mayoría, ediciones varias

Definición ABC <http://www.definicionabc.com>

Diario Clarín, 22.05.1999.

Diario La Gaceta, ediciones varias.

Diario La Nación, ediciones varias.

Diario Página 12, 17.11.2013.

Dirección de Estadísticas de la provincia de Tucumán, Anuario Estadístico de la Provincia de Tucumán 2004.

INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas, 1980.

INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas, 1991.

INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001.

INDEC, Encuestas Permanentes de Hogares.

INDEC, Censo Nacional Económico, 1985

INDEC, Censo Nacional Económico, 1994

INDEC, Censo Nacional Económico, 2005

Naranja docentes de Avellaneda. "A 20 años de la huelga docente de 1988. Las lecciones del "maestrazo", 03.05.2008 (<http://naranjavell.blogspot.com.ar/2008/05/20-aos-de-la-huelga-docente-de-1988.html?m=1>).